



Bogotá, D.C., 21 de marzo de 2024

10-0252-24

Doctor  
**JAIRO ALONSO BAUTISTA**  
Director General del Presupuesto Público Nacional (E)  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
Carrera 8 No. 6 C 38  
Bogotá D.C.

Asunto: Presentación Anteproyecto de Presupuesto Defensoría del Pueblo -Vigencia 2025

Respetada doctor Bautista:

De manera atenta, remito la presentación del Anteproyecto de Presupuesto de la Defensoría del Pueblo para la vigencia fiscal 2025, junto con la justificación de gastos, la base legal y los cálculos correspondientes, el cual fue elaborado de acuerdo con la metodología presentada en la circular externa 009 del 26 de febrero de 2024 y normas complementarias.

Los requerimientos de recursos para el próximo año fueron ajustados a los techos presupuestales definidos para la entidad, así: Funcionamiento \$ 1.197.369.610.900, e Inversión \$ 93.194.085.521, para un total de \$1.290.563.696.421.

Es importante señalar que, la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la misión institucional, ha estimado las necesidades en \$1.345.151.533.244 (Funcionamiento \$1.216.135.313.339 e Inversión \$129.016.219.905), constituyéndose de esta manera un déficit de 54.587.836.823.

Dentro de un marco de estricto control al gasto, difícilmente permitirán cumplir efectivamente nuestra misión constitucional y legal en la defensa, protección, ejercicio, promoción y divulgación de los Derechos Humanos en Colombia, así como la prestación del Servicio Nacional de Defensoría Pública, como garantía del derecho de acceso a la justicia de la población más vulnerable del país, situación que constituye una grave amenaza para el funcionamiento de la Entidad.

Con todo respeto,

  
**CARLOS CAMARGO ASSIS**  
Defensor del Pueblo

Anexo: Anteproyecto de presupuesto 2025 - Justificación de gastos y solicitud de recursos adicionales







FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Sandra Patricia Guzmán Navas – Profesional Especializado G. 20 Diana Paola Castillo Espinosa - Profesional Especializado G. 18 Pablo Ariza Castañeda - Profesional Especializado G. 18	  	21-03-2024
Revisó	Karen Liseth Lobo Pedraza – Jefe Oficina de Planeación Juan Camilo Polania Bobadilla – Asesor del Despacho	 	21-03-2024
Aprobó	Oscar Julián Valencia Loaiza – Secretario General		21-03-2024



TABLA DE CONTENIDO

**1. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 ..... 3**

**1.1. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS Y SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES ..... 3**

**1.2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS ..... 4**

1.2.1. FUNCIONAMIENTO ..... 4

1.2.1.1. GASTOS DE PERSONAL ..... 4

1.2.1.2. PRIMA MENSUAL DEL 5,15% PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ..... 7

1.2.1.2.1. Justificación Técnica ..... 8

1.2.1.2.2. Fundamentos del Derecho ..... 9

1.2.1.2.3. Propuesta prima mensual ..... 10

1.2.1.2.4. Justificación Económica ..... 11

1.2.1.3. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS..... 12

1.2.1.3.1. Activos Fijos - Maquinaria y Equipo y Otros Activos Fijos ..... 12

1.2.1.3.2. Materiales y Suministro ..... 13

1.2.1.3.3. Adquisición de Servicios..... 14

1.2.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES..... 16

1.2.2.2. Defensoría Pública..... 17

1.2.2.3. Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos ley 472 de 1998. .... 26

1.2.2.4. Fondo Especial. Comisión Nacional de Búsqueda (Art. 18 Ley 971 de 2005) ..... 27

1.2.2.5. Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas Ley 589 de 2000 ..... 27

1.2.2.6. Sentencias y Conciliaciones ..... 30

1.2.3. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA..... 31

1.2.4. APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS ..... 31

1.2.5. INVERSIÓN ..... 32



# 1. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025

## 1.1. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS Y SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES

A continuación, se presenta el valor proyectado de los gastos, de conformidad con los techos presupuestales establecidos por el Ministerio de Hacienda, y las necesidades de recursos adicionales orientados a garantizar el funcionamiento de la Entidad durante la vigencia 2025.

TOPES PRESUPUESTALES 2025	
RUBRO	VALOR
Funcionamiento	1.197.369.610.900
Inversión	93.194.085.521
TOTAL	1.290.563.696.421

Tabla 1. Topes Presupuestales - Fuente SIIF Nación

Teniendo en cuenta las necesidades de la entidad Vs los topes presupuestales, se procedió a la elaboración del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2025, así:

Valores en pesos			
CONCEPTO	NECESIDAD	ANTEPROYECTO 2025	DÉFICIT
FUNCIONAMIENTO	1.216.135.313.339	1.197.369.610.900	-18.765.702.439
Gastos de Personal	452.025.831.975	433.260.129.536	-18.765.702.439
Adquisición de Bienes y Servicios	103.805.313.921	103.805.313.921	0
Transferencias Corrientes	655.146.513.963	655.146.513.963	0
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	3.150.569.715	3.150.569.715	0
Aportes al Fondo de Contingencias	2.007.083.765	2.007.083.765	
INVERSIÓN	129.016.219.905	93.194.085.521	-35.822.134.384
Inversión	129.016.219.905	93.194.085.521	-35.822.134.384
TOTALES	1.345.151.533.244	1.290.563.696.421	-54.587.836.823

Tabla 2. Topes Presupuestales Vs Necesidades - Fuente Reporte Dependencias de la Entidad

De conformidad con la anterior información, se solicitan recursos adicionales por valor de \$54.587.836.823.



1.2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS

1.2.1. FUNCIONAMIENTO

1.2.1.1. GASTOS DE PERSONAL

Valor Anteproyecto 2025: \$452.025.831.975  
Déficit: -18.765.702.439

El costo de la nómina de personal corresponde a la planta de cargos certificada y aprobada a 29 de febrero de 2024, la cual asciende a 2658 servidores públicos.

Para la proyección, se tomó como base el salario básico de la vigencia 2024, de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DENOMINACIÓN DE CARGO	Grad o	Planta Actual	Nómina Provista			Total Cargos Provistos	Cargos Vacante s
			Libre Nombramient o	Carrera Administrativa			
				Propieda d	Provisionale s		
		1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
Empleados Públicos							
NIVEL DIRECTIVO		79	79	0	0	79	0
Defensor del Pueblo		1	1			1	0
Vicedefensor		1	1			1	0
Defensor delegado		18	18			18	0
Director Nacional		4	4			4	0
Secretario General		1	1			1	0
Defensor Regional		42	42			42	0
Jefe de Oficina de Control Disciplinario		1	1			1	0
Subdirector	23	3	3			3	0
Jefe de Oficina	23	5	5			5	0
Gestor	21	3	3			3	0
NIVEL ASESOR		46	46	0	0	46	0
Secretario Privado		1	1			1	0
Asesor	23	14	14			14	0
Asesor	22	18	18			18	0
Asesor	21	13	13			13	0
NIVEL EJECUTIVO		0	0	0	0	0	0
NIVEL PROFESIONAL		1.748	27	258	1.463	1.748	0
Profesional Especializado	20	32		6	26	32	0
Profesional Especializado con PT	20	4		1	3	4	0
Profesional Administrativo y de Gestión	19	187		59	128	187	0
Profesional Especializado	19	225	9	33	183	225	0
Profesional Especializado	18	257	9	21	227	257	0
Profesional Especializado	17	606	6	38	562	606	0



DENOMINACIÓN DE CARGO	Grad o	Planta Actual	Nómina Provista			Total Cargos Provistos	Cargos Vacante s
			Libre Nombramien to	Carrera Administrativa			
				Propieda d	Provisionale s		
		1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
Profesional Especializado Criminalística	18	43		22	21	43	0
Profesional Especializado Investigación	17	75		43	32	75	0
Profesional Universitario	15	191	2	15	174	191	0
Profesional Universitario	14	128	1	20	107	128	0
NIVEL TÉCNICO		210	3	73	134	210	0
Técnico en Criminalística	15	102		45	57	102	0
Técnico Administrativo	15	54	3	16	35	54	0
Técnico Administrativo	12	1			1	1	0
Técnico Administrativo	11	53		12	41	53	0
NIVEL ADMINISTRATIVO		575	14	117	432	575	0
Secretario Ejecutivo	15	4	3		1	4	0
Secretario Ejecutivo	12	23	1	2	20	23	0
Secretario Ejecutivo	11	2			2	2	0
Secretario	10	13	3		9	13	0
Auxiliar Administrativo	10	245	1	68	176	245	0
Secretario	9	5			4	5	0
Secretario	8	60		2	48	60	0
Auxiliar	8	1		1		1	0
Conductor Mecánico	8	10	5	1	4	10	0
Auxiliar	7	3		1	2	3	0
Secretario	7	6		4	2	6	0
Auxiliar Administrativo	6	78	1	22	55	78	0
Conductor	6	76		7	69	76	0
Auxiliar de Mantenimiento	6	7		3	4	7	0
Auxiliar de Servicios Generales	4	25		4	21	25	0
Ayudante de Oficina	4	17		2	15	17	0
Total Empleados Públicos		2.658	169	448	2.029	2.658	0
Total Personal		2.658	169	448	2.029	2.658	0

Tabla 3. Formulario 4A Nómina - Fuente Subdirección de Talento Humano





#### 1.2.1.2. PRIMA MENSUAL DEL 5,15% PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo de Colombia es un órgano constitucional y autónomo creado por la Constitución Política de Colombia de 1991, en su Capítulo II Del Ministerio Público, con el propósito de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos (DDHH) dentro del Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Sus procesos misionales están orientados a: (i) la promoción y divulgación de los DDHH y el DIH, que busca fomentar su respeto, protección y garantía para todos los habitantes del territorio nacional y los colombianos en el exterior como condición para la construcción de paz, mediante actividades de formación, divulgación, movilización, gestión y seguimiento a las políticas públicas; (ii) la prevención y protección para generar de manera oportuna advertencias para las autoridades competentes sobre posibles violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, mediante la aplicación de metodologías y mecanismos de monitoreo y seguimiento al conflicto armado interno o la violencia sociopolítica; y (iii) la defensa pública o defensa de los ciudadanos, donde la Defensoría tiene la función de mediar entre los ciudadanos y la administración pública.

De igual forma el Defensor del Pueblo tiene como función velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.
2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.
4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.
5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.
6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.
8. Las demás que determine la ley.

Para ejercer las funciones y las tareas encomendadas por la Constitución y la ley, la Defensoría del Pueblo cuenta con una planta de personal de 2.658 empleos distribuidos de la siguiente manera:

Nivel Central (Despacho del Defensor del Pueblo, Despacho del Vicedefensor del Pueblo, quince Defensoría Delegadas, cuatro Direcciones Nacionales, seis oficinas asesoras, la Secretaría General y tres subdirecciones), central y 42 sedes Regionales<sup>1</sup> distribuidas en los 32 departamentos y en el Distrito Capital, las cuales dependen del Despacho del Defensor del Pueblo.

En el Nivel Central la Defensoría del Pueblo cuenta con el Despacho del Defensor del Pueblo, el Despacho del Vicedefensor del Pueblo, quince Defensoría Delegadas, cuatro Direcciones Nacionales, seis oficinas asesoras, la Secretaría General y tres subdirecciones.

**Para remunerar las funciones administrativas y misionales que cumplen los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, el Legislador fijó su régimen salarial en la Ley 24**

<sup>1</sup> Las Defensorías Regionales son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Guanía, Guaviare, Huila, Magdalena, Magdalena Medio, Meta, Nariño, Norte de Santander, Ocaña, Pacífico, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, San Andrés, Sucre, Tolima, Tumaco, Urabá, Valle Del Cauca, Vaupés, Vichada, Soacha, Pacífico, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar.





de 1992<sup>2</sup>, el cual deberá ser el mismo que el de los empleados de la Procuraduría general de la Nación.

Dicho lo anterior, el presente documento tiene por objeto solicitar concepto favorable por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública para la creación de una Prima Mensual del 5,15%, para los empleados públicos de la Defensoría del Pueblo, y obtener la viabilidad presupuestal por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este documento se compone de cinco secciones, incluida la presente introducción; la segunda sección presenta la justificación técnica; la tercera, describe los fundamentos de derecho que justifica la creación de dichas primas; en la cuarta sección se presenta la propuesta del alcance de la prima a crear; en una quinta la justificación económica y en la sexta y última, la solicitud formal al Departamento Administrativa de Función Pública.

#### 1.2.1.2.1. Justificación Técnica

La Defensoría del Pueblo de Colombia es un órgano constitucional y autónomo creado por la Constitución Política de Colombia de 1991, en su Capítulo II Del Ministerio Público, con el propósito de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos (DDHH) dentro del Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Está constituida como una institución perteneciente al Ministerio Público<sup>3</sup>, y su estructura se encuentra definida en los Decretos 025<sup>4</sup>, 026<sup>5</sup> y 027<sup>6</sup> del 10 de enero de 2014.

Así mismo, la Ley 24 de 1992, en su artículo 35, consagró que el régimen prestacional y salarial de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo será el mismo establecido para los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, mediante Decreto 1544 de 2020 se creó para algunos empleos de la Procuraduría General de la Nación una Prima Mensual, así: *“Artículo 1. Prima mensual. Crear, para los empleos que se señalan a continuación: asesor 1AS grado 19, tesorero 2TE grado 21, profesionales universitarios 3PU grados 15, 16, 17, 18, 19, coordinador administrativo 3CA grado 17 y para los empleos pertenecientes a los niveles técnico, administrativo y operativo de la Procuraduría General de la Nación, una prima mensual, equivalente al cinco, punto quince por ciento (5.15%) de la asignación básica mensual que corresponda al servidor en la fecha en que se cause el derecho a percibirla.”* (Subrayado fuera de texto).

La anterior disposición desconoció el marco normativo regulatorio sobre el régimen prestacional y salarial de los servidores públicos pertenecientes a la Defensoría del Pueblo, señalado en la Ley 24 de 1992, que en su artículo 35 instituyó: **“Los funcionarios y empleados de la Defensoría del Pueblo tendrán el mismo régimen salarial y prestacional de la Procuraduría General de la Nación y estarán amparados contra los riesgos por muerte violenta en el desempeño de sus funciones, en las mismas condiciones de los Magistrados y Jueces de la República.”** (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, la disposición normativa transcrita ordenó con relación a los funcionarios y empleados del Ministerio Público, tanto a los pertenecientes de la Procuraduría General de la Nación, como los vinculados a la Defensoría del Pueblo, tendrían el mismo régimen salarial y prestacional, sin distinción o exclusión alguna, y así lo estableció el legislador.

<sup>2</sup> Art. 35. Los funcionarios y empleados de la Defensoría del Pueblo tendrán el mismo régimen salarial y prestacional de la Procuraduría General de la Nación y estarán amparados contra los riesgos por muerte violenta en el desempeño de sus funciones, en las mismas condiciones de los Magistrados y Jueces de la República.

<sup>3</sup> Constitución Política, capítulo II, artículos 280 y 281.

<sup>4</sup> Por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

<sup>5</sup> Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones.

<sup>6</sup> Por el cual se crean unos cargos en la planta de personal de la Defensoría del Pueblo.





Como podemos observar de la norma en comento, Decreto 1544 de 2020, solo se tuvo en cuenta a los empleados públicos de la Procuraduría General de la Nación al momento de expedirla, omitiendo a los servidores públicos pertenecientes a la Defensoría del Pueblo, a pesar de tener el mismo régimen salarial y prestacional, contrariando con lo señalado por el artículo 35 de la Ley 24 de 1992.

Fue el Legislador el que instituyó respecto del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo unos marcos generales y lineamientos que deben ser tenidos en cuenta por el poder ejecutivo, al momento de desarrollar su actividad reguladora, sobre la fijación del régimen salarial a funcionarios y empleados, que tiene su origen de manera directa en la Ley 24 de 1992, función que está señalada por la propia constitución.

Dentro del marco conceptual y jurídico de la Ley 24 de 1992, con la expedición del Decreto No. 1544 de 2020, se evidencia un trato desigual entre los empleados de la Defensoría del Pueblo y sus compañeros de la Procuraduría General de la Nación.

Para superar ese trato desigual, la Defensoría del Pueblo busca el otorgamiento de la prima mensual, otorgada a los empleados de la Procuraduría General de la Nación en el Decreto No. 1544 de 2020, en condiciones equivalentes dentro del Régimen Prestacional y Salarial de los empleados de la Defensoría del Pueblo.

Además, se pretende dar un reconocimiento a los empleados públicos de la Defensoría del Pueblo, que al igual que sus compañeros de la Procuraduría General de la Nación forman parte del Ministerio Público, y cuya función es la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional, pues dicha prima especial, no está dirigida a los altos empleos del nivel directivo y asesor, sino los profesionales, técnicos y administrativos, de la Entidad.

Luego es imperativo, a fin de que superar la desigualdad planteada y reconocer ese trabajo diario que hacen los empleados de la Entidad, hacer extensivo este beneficio de manera que no resulten afectados los derechos de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo.

#### 1.2.1.2.2. Fundamentos del Derecho

El régimen salarial y prestacional de la Defensoría del Pueblo se encuentra definido en el artículo 35 de la Ley 24 de 1992:

***“ARTÍCULO 35. Los funcionarios y empleados de la Defensoría del Pueblo tendrán el mismo régimen salarial y prestacional de la Procuraduría General de la Nación y estarán amparados contra los riesgos por muerte violenta en el desempeño de sus funciones, en las mismas condiciones de los Magistrados y Jueces de la República.”***

La expedición del Decreto 1544 de 2020, que reconoció solo para algunos servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación una Prima Mensual ***“ARTÍCULO 1. Prima mensual. Crear, para los empleos que se señalan a continuación: asesor 1AS grado 19, tesorero 2TE grado 21, profesionales universitarios 3PU grados 15, 16, 17, 18, 19, coordinador administrativo 3CA grado 17 y para los empleos pertenecientes a los niveles técnico, administrativo y operativo de la Procuraduría General de la Nación, una prima mensual, equivalente al cinco, punto quince por ciento (5.15%) de la asignación básica mensual que corresponda al servidor en la fecha en que se cause el derecho a percibirla.”*** desconociendo el mandato legal del régimen salarial y prestacional establecido respecto de los funcionarios y empleados de la Defensoría del Pueblo en el artículo 35 de la Ley 24 de 1992.

El artículo 53. De la carta política señala:

***“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:***



*Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.”*

La norma del estatuto supremo cubre también a los empleados del sector público<sup>7</sup>, tiene una finalidad protectora, en tal sentido toda normatividad que se expida con ocasión a las relaciones laborales y al reconocimiento de emolumentos prestacionales o régimen prestacional y salarial de los servidores públicos, esta como mínimo debe garantizar sus derechos y principios mínimos fundamentales.

Nuestra norma constitucional se ocupa en los artículos 122 y ss. del empleo público La Constitución política, establece lo siguiente:

*“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente...”*

Del texto constitucional se extrae que todo empleo público debe una vez creada la pertinente planta de personal tener señalado sus funciones detalladas y específicas en la ley o reglamentos y previstos sus emolumentos en el respectivo presupuesto.

En virtud de lo anterior, tanto los servidores públicos pertenecientes a la Procuraduría General de la Nación como los de la Defensoría del Pueblo son iguales ante la ley, por lo tanto, tendrán la misma protección, garantías laborales, iguales derechos prestacionales y en este sentido tendrán el mismo reconocimiento en cuanto a sus prestaciones laborales y legalmente no puede desconocerse dado que es un imperativo legal.

Evaluable razonablemente el análisis técnico sobre el mandato legal del artículo 35 de la Ley 24 de 1992, nos permitió examinar que resulta pertinente solicitar el mismo trato de igualdad que exige la norma en comento y se proceda a reconocer para los servidores de la Defensoría del Pueblo la Prima Mensual establecida en el Decreto 1544 de 2020, estableciéndose los lineamientos generales pertinentes para garantizar este derecho que le asiste al asignar esta prestación.

No existe razón alguna para darle un trato diferenciado e injustificado a los funcionarios y empleados de la Defensoría del Pueblo, que se deriva del texto normativo de reconocimiento de la Prima Mensual, que solo están gozando los empleados de la Procuraduría General de la Nación.

La Ley 4 de 1992 en su artículo 1, facultó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del Ministerio Público, por lo que es, el Presidente de la República, el competente para expedir un Decreto Presidencial que otorgue, en los mismos términos, la Prima Mensual para los empleados de la Defensoría del Pueblo

#### 1.2.1.2.3. Propuesta prima mensual

Solo tendrán derecho al reconocimiento y pago de la prima mensual aquellos servidores públicos vinculados al momento de su reconocimiento, por lo que no tendrá efectos retroactivos.

La Prima Mensual del 5,15% especificada en el Decreto No. 1544 de 2020, determina restrictivamente quienes tienen derecho a esta prestación en la procuraduría General de la Nación, así: los empleos concernientes a los niveles técnico, administrativo y operativo

<sup>7</sup> Sentencia C-055 de 1999 Corte Constitucional



asesor 1AS grado 19, tesorero 2TE grado 21, profesionales universitarios 3PU grados 15, 16, 17, 18, 19, coordinador administrativo 3CA grado 17.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, serían los empleos correspondientes a los niveles administrativo, técnico y profesional, cuyos grados están enmarcados entre el 4 al 20.

Se aclara que los empleos enunciados para ser reconocidos con la prima mensual del 5,15%, no tienen asignado ningún otro emolumento mensual diferente a su asignación básica, tales como prima de antigüedad, prima técnica, prima especial, entre otros.

La prima mensual será cancelada a los empleos que pertenezcan a los niveles y grados mencionados, a partir del mes siguiente de expedición del Decreto que la crea.

1.2.1.2.4. Justificación Económica

Se realizó el cálculo de la prima mensual del 5.15% para 2.533 cargos de los niveles administrativo, técnico y profesional, excluyendo los empleos que pertenecen al nivel directivo y nivel asesor, para un valor anual de **\$18.765.702.439**, con salarios 2024.

GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	CON SALARIOS 2024
SALARIO	\$ 13.152.143.003
FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 13.152.143.003
SUELDO BÁSICO	\$ 10.700.584.276
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 0
PRIMA DE SERVICIO	\$ 488.728.609
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 332.414.600
HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 60.714.257
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.060.608.960
PRIMA DE VACACIONES	\$ 509.092.301
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 4.855.982.084
PENSIONES	\$ 1.414.824.104
SALUD	\$ 1.002.167.074
APORTES DE CESANTÍAS	\$ 1.154.052.561
CAJAS DE COMPENSACION	\$ 513.277.131
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 130.064.800
APORTES AL ICBF	\$ 384.957.848
APORTES AL SENA	\$ 64.159.641
APORTES A LA ESAP	\$ 64.159.641
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	\$ 128.319.283
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 757.577.352
SUELDO DE VACACIONES	\$ 700.669.482
INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 43.906.494
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 13.001.376
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	\$ 0
COSTOS PERMANENTES	\$ 18.765.702.439

Tabla 4. Proyección Prima 5,15%

1.2.1.3. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Valor Anteproyecto 2025: \$103.805.313.921

Se solicitan recursos por valor de \$103.805.313.921, con el fin de satisfacer el 100% de las necesidades identificadas:

A continuación, se presenta la distribución de recursos por cada concepto.

CONCEPTO	NECESIDAD	ANTEPROYECTO 2025	DÉFICIT
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
Activos fijos	10.505.000.000	10.505.000.000	0
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			
Materiales y Suministros	8.001.068.617	8.001.068.617	0
Adquisición de servicios	85.299.245.304	85.299.245.304	0
TOTAL	103.805.313.921	103.805.313.921	0

Tabla 5. Necesidades Vs Topes Presupuestales, Adquisición Bienes y Servicios - Fuente Reporte Dependencias de la Entidad

1.2.1.3.1. Activos Fijos - Maquinaria y Equipo y Otros Activos Fijos

Valor Anteproyecto 2025: \$ 10.505.000.000

RUBRO	CONCEPTO	NECESIDAD	ANTEPROYECTO 2025	DÉFICIT
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.505.000.000	10.505.000.000	0
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	800.000.000	800.000.000	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	800.000.000	800.000.000	0
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	9.705.000.000	9.705.000.000	0
A-02-01-01-006-002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	9.705.000.000	9.705.000.000	0

Tabla 6. Necesidades Vs Topes Presupuestales, Maquinaria y Equipo - Fuente Reporte Dependencias de la Entidad

Es importante resaltar que por este rubro se costea lo siguiente:

- La entidad requiere adelantar proceso de adquisición de desfibriladores, para dar cumplimiento a la Resolución 011/2022, donde establece, la implementación desfibrilador externo automático - DEA, en las diferentes sedes de la Defensoría del Pueblo a Nivel Nacional.
- Ampliación licenciamiento BD ORACLE ENTERPRISE EDITION + ODBEE + RAC: Para mantener los motores de bases de datos de ORACLE y el hardware soportados y actualizados, buscando la estabilidad y que se disminuyan los riesgos de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información contenida en las bases de datos y que estas puedan ser afectadas por falta de actualizaciones.
- Renovación licenciamiento MICROSOFT OFFICE 365 para el año 2025.
- Renovación licenciamiento seguridad perimetral (FORTIGATE, FORTIWEB, FORTIANALYZER, FORTISIEM) Y DE MEMBRESÍA LACNIC: Para mitigar brechas de seguridad y tiempos en la administración de activos dentro de la infraestructura; protegiendo las conexiones remotas que se gestionan a través de la red, así como administrar el acceso a las aplicaciones administrativas y misionales de la entidad.
- Renovación soporte BD SQL SERVER: Para conservar los motores de bases de datos de SQLServer actualizados, manteniendo estabilidad y mitigación de los riesgos de



- integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información contenida en las bases de datos y que estas puedan ser afectadas por falta de actualizaciones.
- **Licenciamiento para análisis de eventos de seguridad:** Se requiere para el análisis de vulnerabilidades, asegurando la protección de la información de la entidad.
  - **Renovación licenciamiento ARCGIS:** Para construir y mantener los sistemas de información geográfico. La Defensoría del Pueblo, viene utilizando el software ArcGIS, que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica.
  - **Software diseño Adobe:** Se utiliza en la entidad, para la edición, a nivel profesional, de imágenes, archivos y composición de diseños digitales

1.2.1.3.2. Materiales y Suministro

Valor Anteproyecto 2025: \$ 8.001.068.617

RUBRO	CONCEPTO	NECESIDAD	ANTEPROYECTO 2025	DÉFICIT
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.001.068.617	8.001.068.617	0
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	646.703.500	646.703.500	0
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	42.703.500	42.703.500	0
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	604.000.000	604.000.000	0
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.716.409.117	2.716.409.117	0
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	634.729.117	634.729.117	0
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.640.000.000	1.640.000.000	0
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	114.000.000	114.000.000	0
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	327.680.000	327.680.000	0
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4.637.956.000	4.637.956.000	0
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.060.000.000	1.060.000.000	0
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	3.577.956.000	3.577.956.000	0

Tabla 7. Necesidades Vs Topes Presupuestales, Maquinaria y Suministro - Fuente Reporte Dependencias de la Entidad

Dentro de estos rubros se tiene como necesidades para todas las sedes de la Defensoría del Pueblo Nivel Central y Regional:

- Elementos de aseo y cafetería
- Adquisición de papelería, útiles de escritorio, tóner
- Adquisición de unidades de conservación para archivos
- Combustible y lubricante del parque automotor de la entidad. Se incrementa dado al aumento del parque automotor en un 30%, para cumplir la misionalidad de la entidad, brindando cobertura a las poblaciones vulnerables en el territorio nacional, e igualmente al alza de precios de los combustibles
- Adquisición de elementos de protección personal, para trabajadores que por norma deben suministrarse, debido el desgaste y condiciones de uso de los mismos.



- Adquisición de material didáctico, papelería y textos para dotar el centro de cuidado infantil de la Defensoría del Pueblo.
- Adquisición de botiquines: La Defensoría del Pueblo, se encuentra certificada en la Norma ISO 45001:2018. Dada esta certificación, la entidad debe contar con botiquines para todas sus sedes, con el fin de brindar medidas de atención de emergencia a sus funcionarios, así como al público que es atendido en sus cada una de las regionales y dependencias de la entidad.
- Elementos Ergonómicos: Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Defensoría del Pueblo, se requiere prevenir enfermedades de tipo osteomuscular, buscando la identificación, el análisis y control de las condiciones subestándar que pueden afectar la salud de los servidores públicos y contratistas de la Entidad.

1.2.1.3.3. Adquisición de Servicios

Valor Anteproyecto 2025: \$ 85.299.245.304

RUBRO	CONCEPTO	NECESIDAD	ANTEPROYECTO 2025	DÉFICIT
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	85.299.245.304	85.299.245.304	0
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	40.000.000	40.000.000	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	40.000.000	40.000.000	0
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	11.617.165.275	11.617.165.275	0
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	488.498.217	488.498.217	0
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.995.782.144	3.995.782.144	0
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	308.520.106	308.520.106	0
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	4.750.000.000	4.750.000.000	0
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	2.074.364.808	2.074.364.808	0
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	6.228.816.488	6.228.816.488	0
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.296.588.606	3.296.588.606	0
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.921.727.882	2.921.727.882	0
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	10.500.000	10.500.000	0
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	58.541.965.572	58.541.965.572	0
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	4.780.505.000	4.780.505.000	0
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	10.414.415.748	10.414.415.748	0
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	19.713.962.044	19.713.962.044	0
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	16.912.582.506	16.912.582.506	0
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	6.720.500.274	6.720.500.274	0
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.971.440.536	1.971.440.536	0





RUBRO	CONCEPTO	NECESIDAD	ANTEPROYECTO 2025	DÉFICIT
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	200.000.000	200.000.000	0
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	360.000.000	360.000.000	0
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	341.440.536	341.440.536	0
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	1.070.000.000	1.070.000.000	0
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	6.899.857.433	6.899.857.433	0

Tabla 8. Necesidades Vs Topes Presupuestales, Adquisición de Bienes y Servicios - Fuente Reporte Dependencias de la Entidad

Dentro de estos rubros se tiene como necesidades:

- Cubrir las necesidades de servicios de mantenimiento y adecuación de las sedes
- Pago de los servicios públicos del Nivel Regional y Central Servicios de distribución de Electricidad, agua y alcantarillado.
- Seguros SOAT y contra todo riesgo. En este rubro, se da un aumento, por el incremento del parque automotor en un 30%.
- Arriendos de inmuebles de las Regionales que no cuentan con sede propia
- Administración de los Inmuebles de la Defensoría
- Servicios profesionales y de apoyo para la misionalidad de la entidad
- Pago del servicio de telefonía a nivel nacional y servicios de telecomunicaciones a través de Internet, programados
- Prestación del servicio de vigilancia del Nivel Regional y Central
- Prestación del servicio de aseo del Nivel Regional y Central
- Mantenimientos del parque automotor
- Mantenimiento aires acondicionados
- Mantenimiento de ascensores
- Certificación ascensores
- Mantenimiento de la planta de generación eléctrica a nivel central
- Mantenimiento de las UPS
- Mantenimiento de las bombas eyectoras de agua
- Mantenimiento red contraincendios
- Mantenimiento data center, CCTV,
- Accesos y seguridad pilonas, talanqueras, pasillos, puertas automatizadas
- Recarga de extintores
- Mantenimiento rampas
- Mantenimiento puertas eléctricas
- Cubrir los desplazamientos de los funcionarios de la Entidad, para dar cumplimiento al Decreto 025vde 2014 y la misionalidad de la Defensoría del Pueblo.
- Espacios de formación y capacitación, en lo referente a las valoraciones de apoyo; establecido en la Ley 1996 de 2019, con el fin de dar cumplimiento al ordenamiento legal; garantizando la prestación del servicio a la población en condición de discapacidad, desde un enfoque diferencial de derechos humanos
- Soporte DATAPROTECTOR: Para mantener actualizada la aplicación que apoya la gestión del proceso de backup en cintas, buscando la integridad y disponibilidad de la información contenida en servidores y dispositivos de almacenamiento.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de aires de precisión DATACENTER





- Conectividad de datos e internet a nivel nacional: Para asegurar las condiciones técnicas de la infraestructura de comunicaciones en todas sus sedes a lo largo del territorio nacional.
- Renovación tokens de acceso AZURE: Para alojamiento, en el servicio de nube pública Microsoft Azure, aplicativos de misión pública como lo son: Visión Web Plus, Firma Electrónica RAJ, reportes Analítica descriptiva, entre otros.
- Adecuación cableado estructurado - sedes regionales: Para garantizar la disponibilidad de los canales y puntos de comunicación y la correcta operación de la infraestructura de red de datos activa y pasiva en cada sede de la entidad, y con ello asegurar la comunicación bidireccional entre equipos de cómputo, servidores, repositorios y demás componentes y periféricos tecnológicos de red, en desarrollo de las diferentes obligaciones atribuidas a la Entidad.
- Renovación de la suscripción y soporte del motor de base de datos IBM INFORMIX
- Renovación de la membresía LACNIC de asignación de recursos IPV6: Para garantizar la protección efectiva de las comunicaciones internas, el acceso a aplicaciones misionales y administrativas, y el tráfico MPLS y de acceso a Internet sobre IPV6
- Estación de trabajo requerida para el análisis forense de las vulneraciones del sistema en el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)
- Compra de SWITCHES de acceso y ACCESS POINT, con los elementos y accesorios complementarios de instalación y puesta en correcto funcionamiento de las sedes.

1.2.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Valor Anteproyecto 2025: \$ 655.146.513.963

A continuación, se presenta la distribución de recursos por cada concepto.

RUBRO	CONCEPTO	NECESIDAD	ANTEPROYECTO 2025	DÉFICIT
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	655.146.513.963	655.146.513.963	0
A-03-03-01-007	DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992)	435.307.854.010	435.307.854.010	0
A-03-03-01-008	FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS -LEY 472 DE 1998.	215.951.108.500	215.951.108.500	0
A-03-03-01-061	FONDO ESPECIAL. COMISION NACIONAL DE BÚSQUEDA (ART. 18 LEY 971 DE 2005)	933.000.000	933.000.000	0
A-03-03-01-068	COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS LEY 589 DE 2000	535.500.000	535.500.000	0
A-03-04	PRESTACIONES SOCIALES	1.948.374.976	1.948.374.976	
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	470.676.477	470.676.477	0

Tabla 9. Necesidades Vs Topes Presupuestales, Transferencias Corrientes - Fuente Reporte Dependencias de la Entidad



#### 1.2.2.2. Defensoría Pública

Valor Anteproyecto 2025: \$ 435.307.854.010

La DNDP cuenta con 5 equipos de trabajo, que articulan la prestación del servicio de Defensoría Pública a nivel nacional. Los profesionales especializados adscritos a la Dirección Nacional de Defensoría Pública, efectuarán desplazamientos a las distintas Regionales, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en cada uno de los procedimientos, de igual forma el Director Nacional con el fin de Impulsar el acceso a la justicia, desde la defensa pública, como mecanismo para garantizar los derechos humanos realizará visitas a las Regionales para fortalecer la toma de decisiones respecto a la mejora continua del servicio de defensoría pública.

Con la finalidad de desarrollar la gestión defensorial integral y en procura de garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas y sujetos de especial protección constitucional, se requiere realizar desplazamientos al territorio, con el objetivo de establecer la situación en que se está prestando el servicio de Defensoría pública, a efectos de establecer las acciones de mejoramiento necesarias que contribuyen a optimizar la calidad del servicio en los programas de la Sub área de víctimas, en condiciones de calidad, eficiencia y eficacia.

Los tiquetes aéreos Gastos de viaje y Viáticos procederá a distribuir en visitas de control a la gestión institucional, traslados de los defensores públicos de la oficina especial de apoyo, para casos emblemáticos, servicio de apoyo pericial y difusión de este, para la valoración y tasación de los daños materiales e inmateriales, que sean soporte para lograr el reconocimiento de los derechos de los usuarios, continuar con la actualización y socialización de los procesos y procedimientos, acordes al nuevo modelo de prestación del servicio en las diferentes Defensorías Regionales, traslados de los representantes judiciales de víctimas para cumplir con diligencias propias de su ejecución contractual y en aquellos casos en los cuales la prestación del servicio así lo demande.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo dentro de sus obligaciones misionales es responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en todo el territorio nacional y ejercer presencia institucional en las regiones más apartadas del país; en el caso de las víctimas del conflicto armado, en aras de ésta salvaguarda, es necesario la realización permanente de jornadas de acopio documental en las regiones donde hay mayor focalización de víctimas, para garantizar la adecuada prestación del servicio de representación judicial a aquellos usuarios cuya situación de vulnerabilidad se encuentra enmarcado dentro de los parámetros establecidos en el programa ley 975/05.

Conforme con las funciones del Grupo de Capacitación e Investigación de brindar formación, capacitación de forma continua y permanente a quienes intervienen en la prestación del Servicio Nacional de Defensoría Pública, en la garantía de los derechos humanos; con el fin de fortalecer las habilidades y destrezas de manera cualificada, integral, técnica y competente, que permitan la mejora continua en la calidad del servicio como Defensor Público y garantice los derechos humanos, a las personas que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí misma la defensa de sus derechos.

Entendiendo la misionalidad institucional de garantizar la atención del servicio en derecho de igualdad a los habitantes del territorio nacional en los derechos fundamentales, y la alianza de la Entidad con la FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDS PERSON -FIO, para el fortalecimiento de los lazos y la cooperación en la defensa de los derechos humanos en la región iberoamericana; es necesario reforzar con estrategias integrales la prestación del servicio de defensoría pública.

Bajo este contexto, la finalidad del Ente Defensorial se circunscribe en la protección de los derechos humanos y las libertades de los habitantes del territorio nacional como de los colombianos residentes en el exterior frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares, mediante las siguientes acciones integradas:



- Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos.
- Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones.
- Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario.
- Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos.
- Organizar y dirigir la Defensoría pública en los términos que señale la ley.
- Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley.

Es así como sobre la base de las disposiciones legales, la Entidad expidió la Resolución No 167 del año 2023, mediante la cual modificó el contenido referente a los grupos internos de trabajo dentro de los que se encuentra el Grupo de Capacitación e Investigación, cuyo propósito principal es:

*Brindar formación y capacitación a los operadores que integran el Sistema Nacional de Defensoría Pública, a través el Plan Nacional de capacitación y realizar investigaciones sobre materias relacionadas con el servicio de defensa Pública para evaluar la calidad del mismo.*

Atendiendo lo expuesto y en el marco de las funciones que le corresponden al Grupo de capacitación e investigación de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, se requiere brindar capacitaciones calificadas para fortalecer habilidades y destrezas a los operadores del sistema nacional de defensoría pública que se susciten en el desarrollo de su propósito, así como aquellas que se estimen necesarias en el territorio nacional y que se encuentren encaminadas a facilitar y garantizar una prestación del servicio de defensoría pública de manera idónea, eficaz y de calidad, en el que los Defensores Públicos, cuenten con los elementos de juicio y estrategias de defensa técnica.

Por todo lo expuesto y considerando que el Grupo de Capacitación e Investigación no cuenta con profesionales expertos con la idoneidad y las competencias que permitan el fortalecimiento de principios, relevancia y actualización éticas, valores y excelencia académica en el marco de los derechos fundamentales, se ha estimado la necesidad de contar con la asesoría y orientación para el desarrollo del proceso de capacitación e investigación, que fortalezca los conocimientos a partir de la incorporación y desarrollos teóricos ante las discusiones doctrinales y académicas en la práctica jurídica.

En concordancia con lo anterior, se hace necesario la contratación de servicios profesionales enfocados en los siguientes programas: Sistema penal acusatorio, derecho público y privado, actualización para víctimas, y actualización en disciplinario; asesoría en el desarrollo del proceso de capacitación e investigación.

#### ❖ ACTIVIDADES DE DEFENSORÍA PÚBLICA

La Dirección Nacional de Defensoría Pública con el fin de velar por el cumplimiento del plan estratégico institucional para la vigencia 2024-2028, programará los siguientes eventos para socializar a los funcionarios adscritos a la misma, los nuevos lineamientos institucionales, en pro de fijar metas en el tiempo de acuerdo a las líneas y objetivos estratégicos:

- Profesionales Administrativos y de Gestión
- Grupo de Investigación Defensorial
- Dirección Nacional de Defensoría Pública

#### CAPACITACIONES PROGRAMADAS

El Grupo de Capacitación e Investigación realizará las capacitaciones para el año 2025, de acuerdo a los resultados que arroje el diagnóstico previo que desarrollará con los defensores públicos y profesionales administrativos y de gestión, a través de la herramienta virtual que disponga la Entidad en su momento para llevar a cabo este proceso.



## LOGISTICA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Conlleva la consecución de viáticos y tiquetes a cargo de la operación logística de los eventos a desarrollar por parte del Grupo de Capacitación e Investigación, los cuales dependerán de los participantes de los mismos y lugares que se requieran a nivel nacional.

## CONTRATOS OPERADORES SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORIA PÚBLICA

En atención al artículo 282 de la Constitución Nacional que además de establecer la razón principal de la Defensoría del Pueblo, la cual es la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, también indica que le corresponde a la Entidad, organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la Ley, por esta razón se hace necesario contar con los recursos que permitan la contratación de los profesionales del derecho que colaboren en la misión constitucional y legal encomendada, así mismo, en lo relacionado con los gastos administrativos para que todo el engranaje se encuentre en marcha en pro de la prestación del servicio de defensoría pública en el territorio nacional.

Ahora bien, como consecuencia de lo expuesto, corresponde al Grupo de Registro y Selección de Operadores de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, hacer un estimativo frente a lo que se constituirá en necesidad en la vigencia 2025, entendiendo que el servicio no obstante ser dinámico, es cambiante, lo que supone entonces, la imperiosa labor de comprender que las cifras de vinculación de los referidos operadores (sustentadas en las necesidades y cargas procesales) varían normalmente a la alza, por los asuntos o circunstancias que deban ser atendidas en región, para el beneficio de las comunidades menos favorecidas en el país.

En este orden de ideas, el presente documento presenta las proyecciones a tener en cuenta en el término más próximo y con ello visualizar la prestación de los servicios de defensoría pública como lo establece la norma constitucional y las demás leyes que enmarcan la labor defensorial como lo son las normas que a continuación se presentan:

El artículo 21 de la Ley 24 de 1992 dispone que *“los servicios de defensoría pública se prestarán en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública. En el cumplimiento de esta función, el Director Nacional de la Defensoría Pública se ceñirá a los criterios que establezca el Defensor del Pueblo, mediante reglamento. En materia penal el servicio de Defensoría Pública se prestará a solicitud del imputado, sindicado o condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa del Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará desde la investigación previa. En materia civil, el Defensor del Pueblo actuará en representación de la parte a quien se otorgue amparo de pobreza según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, debiendo recaer la designación preferentemente en un abogado que forme parte de las listas de Defensores Públicos que elaborará la Dirección de Defensorías Públicas y remitirá a los Despachos Judiciales, conforme a reglamentación que expedirá el Defensor del Pueblo. En los asuntos laborales y contencioso administrativos los Defensores Públicos tendrán la calidad de representantes judiciales o apoderados y para ello requerirán otorgamiento de poder por parte del interesado”*. Los desarrollos legislativos posteriores a la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal Oral Acusatorio), como la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) dentro del cual se comprende además el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la representación de niños y niñas víctimas, la Ley 1257 de 2008 (Prevención y sanción de violencia y discriminación contra las mujeres), la ley 1448 de 2011 (Víctimas y Restitución de Tierras), ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio), ley 1719 de 2014 (Víctimas de violencia sexual), han constituido un nuevo reto y un mayor desafío para el servicio de defensa pública, pero a su vez, han creado la necesidad de incrementar el número de defensores públicos que garanticen el derecho de acceso a la administración de justicia bajo el marco del debido proceso y el derecho de defensa establecido en normas de carácter internacional y nacional, permitiendo de esta manera la pronta y oportuna prestación del servicio de defensa pública.



Con la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012, normas que fueron reglamentadas por el Decreto 3011 de 2013, se buscaba transformar de manera definitiva el enfoque de investigación, procesamiento y judicialización que se venía aplicando en los procesos de Justicia y Paz para asegurar la concentración de esfuerzos en la investigación de los máximos responsables y en la develación de los patrones de macro criminalidad, y articular estos procesos con los demás instrumentos de justicia transicional para velar por la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas. La reforma de la Ley 975 de 2005, buscaba en un principio generar coherencia entre los modelos de reparación de víctimas creados en el país, modificando el incidente de reparación de víctimas para convertirlo en un incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, que permita contribuir a la satisfacción de las víctimas, al esclarecimiento de la verdad, y vincular a las víctimas acreditadas en los procesos de Justicia y Paz al programa de reparación integral por vía administrativa creado por la Ley 1448 de 2011.

Sin embargo, La Corte Constitucional declaró inexecutable el incidente de identificación para la reparación a las víctimas de grupos armados ilegales y el papel que tiene la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras en los términos de la Ley 1592 del 2012 (artículos 23, 24, 27 (parcial), 33 y 40).

La Sentencia C-180 del 2014, según la cual los aspectos relacionados con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación deben definirse en el orden jurisdiccional, so pena de desconocer las garantías al debido proceso, tesis ratificada en la sentencia de constitucionalidad C-287 de 2014.

Se hace entonces necesario, garantizar la participación efectiva de las víctimas en todo el trámite procesal, con la finalidad de que a ellas se les materialice el derecho a la verdad, así mismo, la representación judicial debe estar atenta en las investigaciones que esclarecen las redes de apoyo y financiación de los grupos armados organizados al margen de la ley, entendiéndose esta labor, como parte del derecho a la justicia, instituido en nuestra normatividad constitucional y contemplado por bloque de constitucionalidad.

Es así, como el derecho de acceso a la justicia debe ser un imperativo para la representación judicial de las víctimas que acudan a estos procesos, con miras a hacer exigible al Estado la no repetición de los hechos victimizantes.

Por lo tanto, en aras de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo para lograr una reparación integral, es necesario contar con una mayor presencia de representantes judiciales que apoyen las jornadas previas al Incidente de Reparación Integral, tal y como quedo consignado en la sentencia C-286 de 2014.

La jornada de acopio documental, siempre contará con una alta presencia de Defensores Públicos, quienes serán los mismos que asistirán a las víctimas durante la audiencia de incidente, así como también el equipo interdisciplinario de peritos, por tal razón se hace evidente la necesidad de contar con recursos económicos para el desarrollo de la precitada jornada, consistente en el desplazamiento, viáticos y logística para el equipo de la defensoría del Pueblo.

De igual forma, en el marco del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido realizando un trabajo coordinado, con miras a la debida aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en concreto con la preparación y realización del incidente de reparación integral contemplado en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005.

En este sentido, en el marco de este Comité, se creó una Mesa Técnica para la preparación y coordinación de la realización de los incidentes de reparación integral. En esta mesa participa la Defensoría del Pueblo y otras entidades del orden nacional, por tal razón, resulta preciso contar con los recursos necesarios para garantizar la asistencia de los representantes de la Defensoría en la precitada mesa técnica, a fin de adelantar todas las gestiones necesarias para una debida representación judicial de las víctimas durante la audiencia de incidente.





Según lo expuesto anteriormente, consideramos que se requiere con urgencia un incremento de los defensores públicos que prestan sus servicios ante las Salas de Justicia y Paz, por cuanto la Fiscalía General de la Nación ha venido priorizando un número considerable de hechos cometidos por estructuras armadas ilegales, lo que representa un mayor número de víctimas por representar.

#### LEY 1448 DE 2011

La ley 1448 de 2011 significó un avance en el reconocimiento de las víctimas, estableció una política de reparación administrativa para los distintos hechos victimizantes reconocidos en la misma ley, y se ocupó de la restitución de tierras, ahora con el Nuevo Acuerdo Final para la Paz, se pretende impulsar dicha normatividad en el sentido de fortalecer el componente de la restitución de la tierra, tal y como lo veremos en el aparte de Justicia Transicional en el Punto 1 del Acuerdo.

Así mismo, atendiendo el mandato legal del artículo 43 de la mencionada Ley, sigue siendo necesaria la representación judicial de las víctimas para garantizar su derecho a la reparación integral, asumiendo su asesoría, orientación, acompañamiento, representación extrajudicial y judicial en los trámites y actuaciones que se requieran, una vez solicite la prestación del servicio ante la Defensoría del Pueblo, a fin de garantizar una atención con enfoque diferencial de forma efectiva, integral, ininterrumpida, técnica y competente.

En atención a que la ley 1448 de 2011, es un procedimiento mixto al componerse de una etapa administrativa y otra judicial, las actuaciones de los representantes judiciales de víctimas se deben llevar a cabo ante las siguientes instancias:

- Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Actos administrativos de pago, revocatorias de actos administrativos, derechos de petición, tutelas, recursos, entre otros).
- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (restitución de despojo o abandono, verificación de la inscripción en el registro de tierras, identificación del predio, el titular del derecho, presentación de derechos de petición, tutelas, recursos, entre otros).
- Jueces de restitución de tierras (todas las actuaciones procesales pertinentes).
- Entidades que conformen el SNARIV - Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (Artículo 159 y ss de la ley 1448 de 2011).

La restitución es jurídica y material ya que implica el restablecimiento formal de los derechos de propiedad y posesión que habían sido alterados, y se cumple con la devolución física del predio.

Sin embargo, el proceso de restitución de tierras ha afrontado diversos retos, producto de las condiciones especiales de la tenencia de la tierra, frente a esta situación y a fin de minimizar o evitar posibles conflictos entre las comunidades, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras, profieren la Instrucción Administrativa Conjunta de fecha 4 de agosto de 2014, a través de la misma se pretende mejorar la integralidad en la implementación de la Ley 1448 de 2011, y superar así los desafíos que presenta su ejecución.

Igualmente, el artículo 43 de la Ley 1448 de 2011, indica la obligación de representar a las víctimas del conflicto armado, dentro de los trámites de restitución de tierras ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y los jueces de restitución de tierras, ante esta instancia, se está realizando un monitoreo por parte del Grupo de Representación Judicial de Víctimas, en la etapa del pos fallo, donde se ha tenido participación en la representación judicial de segundos ocupantes.



## JUSTICIA TRANSICIONAL

Teniendo en cuenta el panorama político y jurídico por el cual está atravesando nuestro país, encontrándonos a puertas de la terminación de un conflicto armado, que ha azotado a nuestro territorio nacional durante décadas, se hace necesario resaltar la importancia de la institucionalidad y el papel preponderante de la misma en el desarrollo y puesta en marcha del *nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*, sabiendo que el nuevo Acuerdo Final, siempre se han ceñido al espíritu y alcances de las normas de la Constitución Nacional.

Sea este entonces el punto de partida, para que la Defensoría del Pueblo garante el cumplimiento de los derechos humanos, establezca un andamiaje adecuado que le permita hacer parte del desarrollo del nuevo Acuerdo Final y de esta manera se contribuya a la satisfacción de los derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho de los niños, niñas y adolescentes; la atención a los derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI, entre otros.

En esta medida, el nuevo Acuerdo Final para la Paz es el nuevo reto con el que se encuentra la Defensoría del Pueblo, y con el que se pretende reforzar la representación judicial de aquellos sujetos que así lo requieran, así como también generar un impacto en la puesta en marcha y desarrollo de cada uno de los puntos concebidos en el precitado acuerdo, y en los cuales se tiene una incidencia preponderante por parte de esta Entidad.

Es así como el Punto 1, contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

La incidencia de la Defensoría del Pueblo en este primer punto, se refleja a través de la intervención que hace el Grupo de Representación Judicial con los Representantes Judiciales, teniendo como finalidad la de garantizar el goce efectivo de los derechos de los usuarios durante su representación, fungiendo como posibles beneficiarios los siguientes:

1. Trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente.
2. Asociaciones de trabajadores sin tierra o con tierra insuficiente.
3. Personas y comunidades en programas de asentamiento y reasentamiento.
4. Priorización de la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas.
5. Mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y población desplazada.
6. Personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de la tierra.
7. Población a quienes se les han formalizado sus tierras y los municipios.
8. Población rural y comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras.
9. Grupos en condiciones de vulnerabilidad.
10. Comunidades rurales (niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual e identidad de género diversa y en condición de discapacidad).
11. Cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias.
12. Organizaciones de mujeres.
13. Beneficiarios del Fondo de Tierras.
14. Pequeños y medianos productores.

Para la fecha y de acuerdo con datos estadísticos arrojados por la Agencia Nacional de Tierras, se cuenta con un total de 56.000 solicitudes de formalización aproximadamente, de las cuales la Defensoría del Pueblo bajo la óptica de su misión constitucional, entraría a representar de manera subsidiaria a esta población vulnerable.





Las anteriores acciones, solo serán posibles de ejecutar si se cuenta con un aproximado de 150 Representantes Judiciales adicionales a los que ya se tienen, a fin de que puedan atender las necesidades que trae consigo la implementación de la justicia transicional.

Frente al Punto 5, su eje central son las víctimas y el resarcimiento de las mismas, el acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando componentes judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

En este punto, la Defensoría del Pueblo intervendría a través del Grupo de Representación Judicial a Víctimas, representando las pretensiones de posibles beneficiarios tales como:

1. Víctimas directas e indirectas
2. Víctimas individuales y colectivas
3. Sociedad en general con enfoque diferencial, de género y territorial
4. Víctimas pertenecientes a los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, que merecen una reparación y protección especial con enfoque diferencial, de género y territorial.
5. Integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno
6. Personas que no pertenecen a una organización rebelde.
7. Víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto
8. Víctimas con interés directo y legítimo.

#### **JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ**

La Jurisdicción Especial para la Paz, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tiene por objeto la satisfacción de los derechos de las víctimas, principalmente el derecho a la justicia, pero también el de contribuir a garantizar sus derechos a la verdad, la reparación y la no repetición y así contribuir a la consolidación de la paz.

El acuerdo prevé el fortalecimiento y adecuación de la Política de atención y reparación integral a víctimas, para así responder a las necesidades y oportunidades del contexto de terminación del conflicto. Por ello es fundamental que se hagan los ajustes necesarios para dotar a la Defensoría Pública de los recursos necesarios con el fin de garantizar un mejor nivel de cobertura territorial en la prestación del Servicio una vez se inicie la implementación de la Jurisdicción.

#### **Operadores requeridos para la prestación del servicio de los operadores Defensoría Pública - 2025**

El número de Defensores Públicos que estima el Grupo de Registro y Selección de Operadores, se requieren en el territorio nacional para la vigencia 2025, es de un total de 4.310, entendiéndose la variación y dinamismo sobre la que fluctúa el servicio de Defensoría Pública en cada una de las regiones en las cuales tiene presencia la Defensoría del Pueblo.

Atendiendo lo expuesto, resulta importante manifestar que para garantizar la vinculación del número estimado de defensores públicos para la vigencia 2025, los recursos económicos se hacen necesarios e indispensables para atender toda la cobertura del servicio, lo que derivaría en un aporte significativo a la administración de justicia, pues se prestaría un servicio eficiente, con calidad a través del cual se llenan todas las expectativas de los usuarios.

#### **Criterios para la estimación de necesidades de operadores**

Que el artículo 14 Ley 941 de 2005, enumera y describe como componentes del Sistema

Nacional de Defensoría Pública, a los coordinadores académicos, los defensores públicos, los investigadores, técnicos y auxiliares, entre otros; a su vez el artículo 41, prevé la contratación de Coordinadores Académicos para la implementación de los programas de capacitación y a través de las barras de abogados, para orientar la definición de las estrategias de defensa técnica e idónea, al igual que ciclos de actualización y orientación académica.

Que, en este orden de ideas, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Defensoría Pública, la Dirección Nacional cuenta con las siguientes áreas y programas según lo establecido por la resolución 1008 del 12 de septiembre de 2018:

Áreas:

1. **Área penal**

**Sub área de procesados y condenados**

- Programa penal general: el cual comprenderá las siguientes materias: sistema penal mixto - sistema penal acusatorio - postulados justicia y paz - responsabilidad penal de adolescentes - beneficios jurídicos y administrativos para condenados - desmovilizados - programa penal ante jueces especializados en Cundinamarca.
- Programa casación revisión y extradición
- Programa penal militar

**Sub área de víctimas**

- Programa víctimas general: justicia y paz, infancia y adolescencia, víctimas de género, restitución de tierras, víctimas con ocasión del conflicto armado, trata de personas y normas para la atención y protección de víctimas de la misma, feminicidio y minorías étnicas.
- Programa víctimas en justicia y paz.

2. **Área de derecho público y privado**

- Programa general de derecho público y privado: laboral, civil familia, administrativo, restitución de tierras, extinción de dominio y centro de conciliación.
- Programa restitución de tierras y civil familia.
- Programa administrativo.
- Programa laboral.

3. **Área especial**

- Programa promiscuo: sistema penal mixto, sistema penal oral acusatorio, postulados justicia y paz, responsabilidad penal de adolescentes, desmovilizados, civil familia, laboral, administrativo, restitución de tierras, extinción de dominio, centro de conciliación.
- Programa especial de asistencia jurídica y revisión de la situación legal de los internos con el fin de combatir el hacinamiento carcelario, así como prevenir y mitigar el riesgo de propagación del COVID 19 en los establecimientos penitenciarios.
- Programa minorías étnicas.
- Programa coordinadores académicos.

Con relación al propósito y las funciones del Grupo Interno de Investigación para la Defensa, adscrito a la Dirección Nacional de Defensoría Pública, tiene como finalidad prestar el servicio de investigación a los operadores del Sistema Nacional de Defensoría Pública, mediante recurso humano, técnico - científico y logístico existente en la Entidad, con el fin de apoyar el ejercicio real y efectivo derecho a la defensa.

El grupo está conformado por investigadores, profesionales y técnicos, que participan en la adquisición de elementos probatorios y de convicción, para la sustentación de las hipótesis y estrategias planteadas por los operadores del Sistema Nacional de Defensoría Pública; con el propósito de prestar el servicio de investigación en el área penal, por lo que contamos con dos énfasis: investigación de campo e investigación técnico -científico y de acuerdo a Resolución 279 de 2024 la organización del Grupo dentro la siguiente



disposición:

- Área de Investigación de Campo
- Área Técnico-Científico
- Área Laboratorios Forenses
- Área Gestión administrativa y calidad

Por lo tanto, se requiere de recursos económicos para los diferentes desplazamientos del equipo de las diferentes áreas a nivel nacional para adelantar actividades de campo y servicios periciales; de igual manera se requieren diferentes insumos, materiales, mantenimientos preventivos y certificaciones, que garantizan la prestación del servicio de investigación defensorial.

Con relación a la resolución 546 del 2023, el grupo de control vigilancia y gestión de estadística adscrito al Dirección Nacional de Defensoría Pública, se encarga del seguimiento y análisis de las actividades realizadas por los operadores del Sistema de Defensoría Pública, así como el acompañamiento permanente a los Profesionales Administrativos y de Gestión, en adelante identificados con la abreviatura (PAG), en el cumplimiento de las funciones y procedimientos aplicados en la supervisión de los mismos, a nivel nacional.

El objetivo principal de la actividad es generar acciones preventivas y de mejora continua que contribuyan a optimizar la calidad, cobertura y eficiencia en la prestación del servicio de defensoría pública a través de los siguientes mecanismos:

- Verificar la uniformidad en la actuación nacional de los profesionales administrativos, frente al control de gestión en la ejecución contractual de los defensores respetando la autonomía profesional en su gestión, pero actuando como garantes paralelos al cumplimiento de las funciones y los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Defensoría Pública, para todos los componentes y operadores del servicio.
- Identificar las posibles dificultades que se presenten en cada defensoría regional con la finalidad de adoptar medidas preventivas o correctivas necesarias para una oportuna y correcta prestación del servicio.
- Mitigar las posibles fallas en la prestación del servicio que llegaren a ocasionarse que conduzcan a una deficiente atención, a un riesgo de corrupción o en procesos judiciales en los que pueda hacerse parte a la entidad.

Los PAG se encargan de supervisar los contratos de prestación de servicios, con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual de los defensores públicos. a través del seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de los contratos suscritos por los abogados que ejercen la actividad de defensa pública de la Entidad. Para cumplir esta obligación legal, los PAG se desplazan a través de los diferentes circuitos judiciales de cada región verificando la ejecución de cada contrato suscrito.

#### **BRIGADAS JURIDICAS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.**

Las acciones diseñadas y comprometidas en el “Protocolo para la realización de brigadas jurídicas en establecimientos carcelarios” buscan cumplir los mandatos de la Corte Constitucional, garantizar la acción armónica de las entidades que pueden superar dificultades en la compilación documental y trámite de las peticiones dirigidas a la obtención de beneficios administrativos y penitenciarios y, finalmente, facilitar la labor de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, en cuanto a la revisión y obtención completa de los requisitos para evaluar y decidir respecto de dichas solicitudes, estas se coordinan entre la dirección nacional de defensoría pública, los PAG en las defensorías regionales y son adelantadas en compañía de los defensores públicos del área penal, para ello se requiere apropiación de recursos, los cuales se destinan a cumplir con la logística necesaria para los viáticos y desplazamiento del personal necesario en los establecimientos carcelarios que se encuentran a distancias superiores a 60 kilómetros de la sede principal de la defensoría regional.



1.2.2.3. Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos ley 472 de 1998.

Valor Anteproyecto 2025: \$ 215.951.108.500

La ley 472 de 1998 reglamento las acciones populares y de grupo, así mismo creó el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y su manejo quedó a cargo de la Defensoría del Pueblo, tal y como se indica en el art. 72<sup>8</sup> Ibidem.

La ley 24 de 1992 en su ordinal 2 del art. 9, estableció que el Defensor del Pueblo, determinará la dirección y coordinación de las diferentes dependencias que conforman la entidad, es así que mediante la resolución defensorial No. 1054 de 2020 determina que entre las funciones ya asignadas a la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales coordinará el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos - FDDIC y la ordenación del gasto del mismo estará a cargo de la Secretaría General.

El artículo 70 de la Ley 472 de 1998, dispone la creación del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y el artículo 71 ibidem establece sus funciones:

**“Artículo 71. Funciones del Fondo: El Fondo tendrá las siguientes funciones:**

(...)

**e) Administrar y pagar las indemnizaciones de que trata el artículo 68 <sic, se refiere al artículo 65> numeral 3 de la presente ley.”** (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-215 de 1999<sup>9</sup>, precisó que la función de la Defensoría del Pueblo como administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, se circunscribe a recibir el valor total de la condena y posteriormente pagar las indemnizaciones a favor de quienes integraron los respectivos grupos de beneficiarios. Es decir, reafirma la condición de simple administrador y pagador, consignada en el literal e) del artículo 71 de la Ley 472 de 1998.

Igualmente, el Consejo de Estado mediante auto<sup>10</sup> del 7 de junio de 2006, expone sobre la naturaleza mixta del proceso iniciado en ejercicio de una acción de grupo. Señala que la primera etapa culmina con la decisión que pone fin al proceso de acción de grupo, e indica que la segunda etapa, es decir, la llevada a cabo por parte del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos es eminentemente administrativa, esto debido a que la finalidad es distribuir la suma ponderada de las indemnizaciones individuales consignadas por el condenado. Lo anterior, reiterando que dicha administración y posterior pago, se realiza con estricto apego a los parámetros establecidos por el juez de conocimiento en la sentencia.

Conforme a lo expuesto, una vez los despachos judiciales profieren sentencias en las acciones de grupo informan a la Defensoría del Pueblo - Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, para que se dé inicio al trámite administrativo de pago.

Actualmente el Fondo tiene en trámite administrativo de pago más de 95 acciones de grupo, las acciones reportadas en el anteproyecto corresponden a las comunicadas en el 2023 con excepción de Doña Juana y Cartagena, que ya se vienen pagando desde el año

<sup>8</sup> Artículo 72<sup>o</sup>.- Manejo del Fondo. El manejo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, estará a cargo de la Defensoría del Pueblo.

<sup>9</sup> Magistrada Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez

<sup>10</sup> Consejo de Estado - Auto de fecha siete (07) de junio del dos mil seis (2006) - Magistrada Ponente Ruth Stella Correa - Radicación número: 25000-23-26-000-2001-00213-01 (AG)C



2022 a los beneficiarios, pero por la gran cantidad de beneficiarios reconocidos siguen aportando documentos para dicho fin y la entidad continua con el trámite de pago.

Dentro de este rubro se tiene como necesidades:

FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	VALOR CONDENA
FINANCIACIONES	1.300.000.000,00
ACCIÓN DE GRUPO CREDICORCAPITAL	1.753.084.000,00
ACCIÓN DE GRUPO ANCHICAYA	40.000.000.000,00
ACCIÓN DE GRUPO DOÑA JUANA	41.290.000.000,00
ACCION DE GRUPO ABEL MURILLO	58.847.246.000,00
ACCION DE GRUPO INDERVALLE	25.698.808.000,00
ACCION DE GRUPO LA GRANJA	3.000.000.000,00
ACCION DE GRUPO VEREDA SAN MARTIN	1.933.573.900,00
ACCION DE GRUPO YONDO	151.812.300,00
ACCION DE GRUPO WOUNAAN	20.250.000.000,00
ACCION DE GRUPO LA CABUYA	7.700.000.000,00
ACCION DE GRUPO STA MARIA DE LOS ANGELES	2.243.857.600,00
ACCIÓN DE GRUPO PALMA DE ACEITE - ICA	10.482.905.000,00
ACCIÓN DE GRUPO EMELAUNION ESP	183.000.000,00
ACCIÓN DE GRUPO MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.116.821.700,00
TOTALES	215.951.108.500,00

Tabla 10. Necesidades Fondo para la Defensa 2025

1.2.2.4. Fondo Especial. Comisión Nacional de Búsqueda (Art. 18 Ley 971 de 2005)

Valor Anteproyecto 2025: \$ 933.000.000

Fondo cuenta dentro de la Defensoría del Pueblo, como un sistema separado de cuentas, para el manejo de los recursos provenientes de las donaciones, aportes y recursos que destinen las organizaciones y entidades privadas y públicas, nacionales y extranjeras, así como sus rendimientos, para el manejo y la promoción de las actividades asignadas a la Comisión de Búsqueda y de las autoridades judiciales establecidas en el artículo 1° de esta ley.

1.2.2.5. Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas Ley 589 de 2000

Valor Anteproyecto 2025: \$ 535.500.000

La Ley 589 de 2000 "por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones", en su artículo 8° creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas-CBPD-, como máximo organismo en materia de desaparición forzada en Colombia, "con el fin de apoyar y promover la investigación del delito de desaparición forzada, con pleno respeto de las competencias institucionales y de las facultades de los sujetos procesales".

Mediante el Decreto 1862 de 2014, "por el cual se establece el reglamento de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada por la Ley 589 de 2000", se señala en el artículo 2, la función primordial de la Comisión , como "Articular y propiciar estrategias ante el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), creado mediante el Decreto número 4100 de 2011, específicamente con el subsistema de Derechos Civiles y Políticos; de todas las acciones estructurales de política pública





relacionadas con la prevención, atención y protección para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de esta conducta, estableciendo una relación de interlocución dialógica entre la Comisión y el Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH”.

En el artículo 2 del Decreto mencionado, se indica que para “para cumplir su objetivo, la Comisión desarrollará las siguientes funciones:

1. Apoyar la investigación en los casos de desaparición forzada, mediante el desarrollo de actividades que busquen obtener sus objetivos tales como ubicar a las personas desaparecidas, determinar las condiciones de la desaparición y establecer la identidad de los presuntos responsables.
2. Promover las investigaciones por desaparición forzada de personas, actividad que implica la obligación de conocer los casos de desaparición forzada, tomando en cuenta la naturaleza y características propias del delito, los mecanismos de investigación específicos y las medidas de protección y salvaguarda de los derechos de la persona desaparecida. Las instituciones con competencia en los casos de Desaparición Forzada de Personas pondrán a disposición de los investigadores, de conformidad con la ley, los medios y recursos que conduzcan de manera adecuada a obtener el éxito de las mismas.
3. Diseñar los planes de búsqueda de personas desaparecidas en situaciones y casos específicos, para lo cual podrá acudir a la asesoría de expertos en el tema de la investigación de delitos de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.
4. Evaluar y emitir los planes de búsqueda de personas desaparecidas, función que supone conocer de manera general los planes que han puesto en marcha las distintas entidades encargadas de la investigación del delito de desaparición forzada, para determinar si ellos son adecuados a los fines buscados con la investigación y si los mismos se ajustan a la preceptiva legal vigente.
5. Apoyar la ejecución de los planes de búsqueda de personas desaparecidas y prestar la ayuda que necesiten las autoridades encargadas de adelantar el mecanismo de búsqueda urgente de manera que se logren los objetivos del mismo.
6. Conformar grupos de trabajo para el impulso de la investigación de casos específicos de desaparición forzada, frente a los cuales podrá evaluar los planes de búsqueda adoptados y emitir recomendaciones para su efectividad.
7. Colaborar con la depuración, actualización y fortalecimiento del Registro Nacional de Desaparecidos y Cadáveres en condición de no identificados, así como en el diseño y puesta en marcha del Registro de Personas Capturadas y Detenidas.
8. Supervisar y emitir recomendaciones dentro del proceso de consolidación de la información existente en los registros previstos en el numeral anterior y acceder a la información para el cabal cumplimiento de sus funciones.
9. Requerir la actuación de los organismos del Estado, cuando lo estime pertinente para el cumplimiento de sus objetivos.
10. Recomendar medidas concretas de impulso y seguimiento de las investigaciones por desaparición forzada de personas, de acuerdo con las competencias de cada institución.
11. Solicitar, para casos específicos de búsqueda de personas desaparecidas, la difusión gratuita de mensajes o campañas a través de los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético en los espacios institucionales.



12. Solicitar la colaboración de los medios de comunicación para la obtención de los fines de la Comisión.
13. Promover mecanismos de coordinación, información e interlocución, en el ámbito nacional, regional y local, entre las organizaciones estatales y entre estas y las organizaciones privadas, con el fin de obtener la efectiva aplicación de la Ley 589 de 2000.
14. Atender las consultas del Gobierno Nacional en relación con la aplicación de las diferentes leyes que se hayan expedido sobre la materia o que se relacionen con el delito de desaparición forzada.
15. Promover ante los organismos gubernamentales y entidades privadas la implementación de programas de apoyo a las familias de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada.
16. Recibir la información que le aporten los particulares en los casos de desaparición forzada de personas y remitirla a las entidades competentes.
17. Recomendar a las autoridades competentes el estudio de protección a víctimas y testigos en los casos de desaparición forzada de personas, cuando así lo determine la Comisión.
18. Promover el fortalecimiento institucional y financiero de los organismos encargados de la búsqueda de las personas desaparecidas.
19. Adoptar todas las decisiones y medidas que considere pertinentes para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.
20. Las demás que establezca la ley”.

Dentro de las funciones y/o actividades principales asignadas por mandato legal a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se encuentran las contempladas en [EP1]:

El artículo 14 de la Ley 1408 de 2010, el cual establece que: “La memoria histórica de las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzosamente será objeto de conmemoración la última semana de mayo, en el marco de la Semana de los Detenidos - Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos”.

El Artículo 58 del Decreto 303 de 2015, establece que: “la última semana del mes mayo, en el marco de la Semana los Detenidos-Desaparecidos, y el treinta (30) agosto de año, en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos, autoridades nacionales, departamentales, municipales y distritales, en todos los niveles de la administración pública, realizarán conferencias, talleres y jornadas reflexión sobre derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos humanos, como homenaje a las víctimas de desaparición forzada...”.

El Artículo 18 del Decreto 303 de 2015 “... La Comisión convocará por lo menos una vez al año, a la Fiscalía General de la Nación, al Comité Interinstitucional de Genética Forense, a los familiares de víctimas, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales acreditados en Colombia, a una jornada de socialización del Informe emitido por el Banco...”.

En este orden, es preciso señalar que el artículo 17 del Decreto 1862 de 2014, señala: “Presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros, determinará los planes y programas específicos correspondientes a sus





funciones que deban realizarse con los recursos asignados a la Comisión en el presupuesto de la Defensoría del Pueblo”

En el artículo 3° del citado Decreto, se dispone que la Presidencia de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, será ejercida por el Defensor del Pueblo o su delegado permanente.

Dando cumplimiento a lo expuesto, surge para la vigencia 2023 la necesidad de realizar la vinculación del equipo de trabajo, tal como lo estipula el artículo 8° del Decreto 1862 de 2014 “Equipo de Trabajo. Créase un equipo interdisciplinario e interinstitucional permanente para la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual funcionará bajo la coordinación de la Secretaría Técnica. Dicho equipo estará conformado por 15 personas, de las cuales 6 serán servidores públicos profesionales, nombrados por cada una de las Entidades: 2 serán empleados o contratistas profesionales designados por cada una de las Organizaciones Sociales miembro de la Comisión y 7 profesionales vinculados mediante contrato de prestación de servicios con recursos del presupuesto anual de la Comisión. El Equipo de Trabajo funcionará en la sede de la Comisión”.

1.2.2.6. Sentencias y Conciliaciones

Dentro de este rubro se tiene contemplado pagar:

- Pago de las siguientes sentencias:

CODIGO UNICO DEL PROCESO	FECHA DE ADMISIÓN	JURISDICCIÓN	MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	INSTANCIA	VALOR
76001333301420170009800	1/06/2017	2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	1275 REPARACION DIRECTA	JOSE OMAR CASTILLO	2 SEGUNDA INSTANCIA	\$ 160.000.000
76001333300620180021400	15/11/2018	2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	1275 REPARACION DIRECTA	DARWIN DANIEL CASTILLO IBARRA	2 SEGUNDA INSTANCIA	\$ 82.833.880
11001334204920180001300	30/01/2018	2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	1266 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	SANDRA LILIANA CONDE OSPINA	2 SEGUNDA INSTANCIA	\$ 18.840.007
2000133330820180023500	1/08/2018	2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	1266 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	MARTHA CECILIA SERPA FUENTES	2 SEGUNDA INSTANCIA	\$ 209.002.590
TOTAL						\$ 470.676.477

Tabla 14. Sentencias



1.2.3. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

Valor Anteproyecto 2025: \$ 3.150.569.715

RUBRO	CONCEPTO	NECESIDAD	ANTEPROYECTO 2025	DÉFICIT
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.150.569.715	3.150.569.715	0
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	698.069.715	698.069.715	0
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	174.000.000	174.000.000	0
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.278.500.000	2.278.500.000	0

Tabla 12. Necesidades Multas e Intereses de Mora 2025

Dentro de este rubro se tiene contemplado pagar:

- Impuestos territoriales, los recursos solicitados para la vigencia 2025, corresponden a los predios adquiridos por la Defensoría del Pueblo; para el pago del predial y el pago de impuestos de vehículos, el cual incrementa considerando el aumento del parque automotor y los nuevos predios adquiridos por la entidad

1.2.4. APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS

Valor Anteproyecto 2025: \$ 2.007.083.765

Se realiza reporte el Sistema del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Formulario de Cálculo al Fondo de Contingencias, como se muestra en la siguiente imagen:



Formulario de Cálculo  
Aportes al FCEE por S&C<sup>1</sup>

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Fecha

11/03/2024

Nombre Entidad

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NIT de la Entidad

800186061

Nombres y apellidos

ISABELA MARIA LADINO BAENA

Dependencia

OFICINA JURIDICA

Teléfono de contacto

3008114307

Correo electrónico

[iladino@defensoria.gov.co](mailto:iladino@defensoria.gov.co)

Su entidad debe presentar el plan de aportes del 26 de febrero al 08 de marzo

¿Desea excluir procesos atípicos?

☒ SI

Procesos (Exclusión)

Oprima el botón "Procesos (Exclusión)"

☐ NO

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS EKOGUI

Total procesos eKOGUI

140,00

Desviación estándar

2.7724

Monto de exclusión<sup>2</sup>

710.479.942

No. Procesos excluidos

30,00

Total No. Procesos

110,00

ESTADO DE CUENTA DE LOS APORTES AL FCEE POR S&C

Valor aportes apropiados 2024<sup>3</sup>

Estado de cuenta 31/12/2023<sup>4</sup>

914.193.541

Oprima el botón "Aplicar Metodología", para valorar el Pasivo Contingente Judicial y el Aporte al FCEE por S&C

VALORES FINALES

Pasivo Contingente Judicial

4.603.572.277

Total de Aportes al FCEE por S&C

3.651.596.632

Valor de Aporte Vigencia 2025<sup>5</sup>

2.007.083.765

1. FCEE por S&C: Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por Sentencias y Conciliaciones.  
2. Monto de exclusión: Valor a partir del cual se excluyen los procesos por encima de la media aritmética.  
3. Valor aportes apropiados en 2024: Valor de aporte aprobado en la vigencia anterior.  
4. Saldo en el Fondo 31/12/2023: Hace referencia al valor que se encuentra en el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por Sentencias y Conciliaciones, de acuerdo con el estado de cuenta emitido por la Fiduprevsora a esta fecha de corte.  
5. Retiros (Desembolsos) 31/12/2023: Retiros realizados por reconocimientos de contingencias judiciales con cargo al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por sentencias y conciliaciones a esta fecha de corte.

1.2.5. INVERSIÓN

Valor Anteproyecto 2025: \$ 93.194.085.521  
Valor Necesidades 2025: \$ 129.016.219.095

Déficit: \$ - 35.822.134.384

En la matriz adjunta, se presenta los proyectos con la solicitud de recursos para la vigencia 2025 de acuerdo con las necesidades establecidas para cada rubro.



BPIN	PROYECTO	VALOR SOLICITADO	JUSTIFICACIÓN
202300000000415	Mejoramiento de los índices de riesgos de vulneración del Derechos Humanos Nacional	54.265.908.204,0	El proyecto pretende fortalecer la atención especializada en los territorios mediante la asistencia, asesoría y acompañamiento en los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos a 87.713,00 personas, así como brindar promoción a 74.503,0 ciudadanos. Igualmente el proyecto busca incorporar el enfoque basado en derechos humanos en el ciclo de las políticas públicas para la garantía, respeto, protección de los derechos de la población más vulnerable del país, especialmente en el ámbito territorial a través del empoderamiento de la sociedad civil, la sensibilización de servidores públicos y la comunidad en general, de tal manera que permita el ejercicio de la magistratura moral a la Defensoría del Pueblo y a la ciudadanía la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos
2021011000074	Contribución en la Construcción de Ciudadanía de la Víctimas del Conflicto Armado Nacional	26.592.168.753,0	El proyecto busca, con los recursos solicitados realizar 129 documento de advertencia y seguimiento a riesgos de violaciones de DDHH y DIH. Asistir técnicamente a 186.165 víctimas para resolver sus solicitudes y peticiones relacionadas con posibles violaciones a sus derechos. Capacitar a 87.079 víctimas en rutas y acciones para que se empoderen y accedan de una mejor manera a sus derechos.
2023000000000372	Modernización de la infraestructura física, funcional y operativa de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Nacional	42.213.078.948,0	Con estos recursos se pretende adecuar la infraestructura de 15 sedes, en temas como reforzamiento estructural, servicios tecnológicos y mantenimientos anuales.  Igualmente se busca construir 1 sede y adquirir 4 para mejorar las condiciones de trabajo de los servidores y de los ciudadanos que reciben los servicios de la Entidad. Se pretende dotar 3 sedes para mejorar las condiciones de trabajo y mejorar 3 sedes a través de



BPIN	PROYECTO	VALOR SOLICITADO	JUSTIFICACIÓN
			modificaciones el acceso y atención a los ciudadanos.
202300000000243	Consolidación del sistema integrado de gestión institucional de la Defensoría del Pueblo Nacional	5.945.064.000,0	<p>Se busca certificar a la entidad en la norma ISO 22301 Continuidad del Negocio, la cual busca prevenir, preparar, responder y recuperarse de incidentes inesperados.</p> <p>También se busca continuar con la implementación en las regionales de la Norma NTC 5906 Centros de conciliación, en línea con lo establecido en el Plan Decenal de Justicia.</p>
TOTALES		129.016.219.905,0	

Tabla 13. Necesidades Inversión 2025